

Sentencia impugnada: Cámara Civil de la Corte de Apelación de San Cristóbal, del 9 de septiembre de 2011.

Materia: Civil.

Recurrentes: Francisco Marrero y compartes.

Abogados: Lcdo. Julián Mateo Jesús y Mercedito Mateo Navarro.

Recurridos: Seguros Cibao, S. A., y Miguel Darío de Jesús Brito Reynoso.

Abogado: Lic. Edi González Céspedes.

SALA CIVIL Y COMERCIAL.

Rechaza.

Audiencia pública del 30 de agosto de 2017.

Preside: Francisco Antonio Jerez Mena.

Dios, Patria y Libertad

En Nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por los señores Francisco Marrero, Juana de la Cruz Lapaix, Guillermo Jiménez y Crucita García, dominicanos, mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad y electoral núms. 068-0014836-0, 0047309-7 (sic), 068-0015168-7 y 068-0015123-2, respectivamente, domiciliados y residentes en el municipio de Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, contra la sentencia civil núm. 138-2011, dictada el 9 de septiembre de 2011, por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, cuyo dispositivo figura copiado más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lcdo. Julián Mateo Jesús por sí y por el Lcdo. Mercedito Mateo Navarro, abogados de la parte recurrente, Francisco Marrero, Juana de la Cruz Lapaix, Guillermo Jiménez y Crucita García;

Oído el dictamen de la magistrada procuradora general adjunta de la República, el cual termina: Único: Que en el caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes de diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de comunicación al Ministerio Público por ante los Jueces del fondo, “Dejamos al Criterio de la Suprema Corte de Justicia, la Solución del presente Recurso de Casación”;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 17 de octubre de 2011, suscrito por los Lcdo. Julián Mateo Jesús y Mercedito Mateo Navarro, abogados de la parte recurrente, Francisco Marrero, Juana de la Cruz Lapaix, Guillermo Jiménez y Crucita García, en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 30 de diciembre de 2011, suscrito por el Lcdo. Edi González Céspedes, abogado de la parte recurrida, Seguros Cibao, S. A., y Miguel Darío de Jesús Brito Reynoso;

Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25-91, de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, de fecha 10 de julio de 1997, los artículos 1 y 65 de la

Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008;

La CORTE, en audiencia pública del 29 de mayo de 2013, estando presentes los magistrados Julio César Castaños Guzmán, presidente; Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del secretario;

Visto el auto dictado el 15 de agosto de 2017, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, presidente de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a los magistrados Manuel Alexis Read Ortiz, Blas Rafael Fernández Gómez y Pilar Jiménez Ortiz, jueces de esta sala, para integrarse a esta en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926-35, de fecha 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294-40, de fecha 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta: a) que con motivo de la demanda en daños y perjuicios incoada por los señores Francisco Marrero, Juana de la Cruz Lapaix, Guillermo Jiménez y Crucita García contra la entidad Seguros Cibao, S. A., y el señor Miguel Darío de Jesús Brito Reynoso, el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, dictó la sentencia civil núm. 0001-2011, de fecha 21 de marzo de 2011, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: **“PRIMERO:** SOBREESEE la presente Demanda en Daños y Perjuicios, incoada por los señores FRANCISCO MARRERO, JUANA DE LA CRUZ LAPAIX, GUILLERMO JIMÉNEZ Y CRUCITA GARCÍA, contra el señor MIGUEL DARÍO DE JESÚS BRITO REYNOSO, con oposición a la COMPAÑÍA SEGUROS CIBAO, S. A., hasta tanto el Juzgado de Paz Especial de Tránsito G. 1 de este Distrito Judicial de Villa Altagracia, decida la suerte del expediente ya sometido a su jurisdicción, el cual tiene relación al proceso que nos ocupa; **SEGUNDO:** Se reservan las costas”; b) no conformes con dicha decisión los señores Francisco Marrero, Juana de la Cruz Lapaix, Guillermo Jiménez y Crucita García, interpusieron formal recurso de apelación, mediante el acto núm. 241-11, de fecha 6 de mayo de 2011, instrumentado por el ministerial Francisco Arias Pozo, alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia, en ocasión del cual la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, dictó en fecha 9 de septiembre de 2011, la sentencia civil núm. 138-2011, hoy recurrida, cuya parte dispositiva copiada textualmente establece lo siguiente: **“PRIMERO:** DECLARA inadmisile, por las razones expuestas, el recurso de apelación interpuesto por FRANCISCO MARRERO y compartes contra la sentencia Civil No. 01-11 dictada en fecha 21 de marzo del 2011 por el Juez titular del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Villa Altagracia; **SEGUNDO:** Compensa pura y simplemente las costas del proceso entre las partes en litis; **TERCERO:** Comisiona al ministerial de estrados de esta Corte David Pérez Méndez para la notificación de la presente decisión”;

Considerando, que la parte recurrente propone como medios de casación los siguientes: **“Primer Medio:** violación de los artículos 50, 533, 118, 124 del Código Procesal Penal y 128 de la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana, así como del artículo 1384 párrafo 1 del Código de Procedimiento Civil. Falta de motivos y falta de base legal y en desnaturalización de los hechos de la causa; **Segundo Medio:** Violación del artículo 1315 del Código Civil. Violación del artículo 451 del Código de Procedimiento Civil por falsa aplicación. Violación del artículo 141 del mismo Código. Violación de los artículos 44 y siguientes de la Ley 834, relativos a los medios de inadmisión, por errónea aplicación de los mismos y violación del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil”;

Considerando, que previo al examen de los medios en que los recurrentes sustentan el recurso de casación de que se trata, se impone decidir en primer orden la inadmisibilidad planteada por la parte recurrida, toda vez que uno de los efectos de las inadmisibilidades, cuando se acogen, es que impiden la continuación y discusión del fondo del asunto; que en fundamento del mismo aduce, textualmente lo siguiente: “el presente recurso de casación deviene además en ser inadmisile porque la sentencia impugnada, dictada por el pleno de la Cámara Civil de la Corte, confirma en todas sus partes el (sic) la sentencia No. 0001/2011, del 21-03-2011, evacuado (sic) por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primer (sic) Instancia de Villa Altagracia, la cual solo tomó una medida de instrucción y no prejuzgada el fondo, y a la luz de la nueva Ley de Procedimiento de Casación, la No. 491-08, del 14-10-2008 (sic) sobre Procedimiento de Casación, que modifica los artículos 5, 12 y 20 de la Ley 3726

del 29-12-1953; expresa en su artículo único párrafo II, letra c: la sentencia que contenga condenaciones que no exceda la cuantía de doscientos (200) salarios mínimos del más alto establecido para el sector privado (...);

Considerando, que del estudio de la decisión impugnada se verifica, que la corte *a qua* declaró inadmisble el recurso de apelación contra la sentencia que ordenó el sobreseimiento del conocimiento de la demanda en daños y perjuicios, es decir, que la norma invocada no tiene aplicación en la especie pues el fallo atacado no contiene condenaciones pecuniarias, razón por la cual procede desestimar el medio de inadmisión planteado;

Considerando, que para una mejor comprensión del asunto que se discute en el recurso, resulta útil señalar, que de la sentencia impugnada y de la relación de los hechos que en ella se recoge, se verifica: 1. que los señores Francisco Marrero, Juana de la Cruz Lapaix, Guillermo Jiménez y Crucita García, incoaron una demanda en daños y perjuicios contra el señor Miguel Darío de Jesús Brito Reynoso y la razón social Seguros Cibao, S. A., raíz del perjuicio en ocasión del accidente de tránsito donde perdieron la vida los señores Nelson Marrero Rivera y Wilton Jiménez García; 2) que el tribunal de primer grado, específicamente, el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Villa Altagracia, sobreseyó el conocimiento de la demanda hasta tanto la jurisdicción penal decida sobre el proceso seguido contra el conductor; 3) que dicha decisión fue recurrida en apelación por los demandantes originales ante la Cámara Civil de la Corte de Apelación de San Cristóbal, la cual declaró inadmisble el recurso de apelación por estar dirigido contra una sentencia preparatoria;

Considerando, que, una vez edificados sobre los antecedentes procesales del caso, se examinarán reunidos los medios de casación por su estrecha vinculación; que los recurrentes alegan en un primer aspecto, que la corte *a qua* incurrió en falta de motivos y de base legal al desnaturalizar los hechos de la causa pues aplicó erróneamente el artículo 50 del Código Procesal Penal ya que el sobreseimiento era innecesario en razón de que los demandantes originales, hoy recurridos en casación, no pusieron en causa ante la jurisdicción civil al imputado o conductor del vehículo causante del accidente señor: Persio Antonio Madera Ureña, sino únicamente al propietario del vehículo: señor Miguel Darío de Jesús Brito Reynoso en su calidad de guardián y, a la compañía Seguros Cibao, S. A.; que la alzada con la decisión impugnada vulneró el artículo 50 del Código Procesal Penal y del artículo 128 de la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana, así como en el artículo 1384 párrafo 1ro del Código Civil; que continúa alegando la parte recurrente, que la alzada emitió su fallo fundamentándose en base a un proceso penal inexistente pues, se le demostró a través de las pruebas documentales que se desistió de la acción civil llevada ante la jurisdicción penal por la fuga del imputado, en consecuencia, no hay pendiente ningún proceso penal destinado a demostrar la culpabilidad o no del demandado;

Considerando, que de la lectura de la sentencia impugnada se evidencia, que la alzada declaró inadmisble el recurso de apelación; sin embargo, de la transcripción de los agravios planteados por la parte recurrente se evidencia que estos se refieren a cuestiones de fondo que no fueron dilucidadas ni examinadas por la jurisdicción de alzada ya que los medios de inadmisión cuando son acogidos en virtud de su propia naturaleza elude el conocimiento del fondo de la demanda o del recurso según sea el caso, en tal sentido, la alzada no tenía que referirse a los derechos de los demandantes originales, por tanto, dichos agravios resultan inadmisibles en casación;

Considerando, que procede el examen del segundo aspecto de los medios de casación planteados; que los recurrentes sustentan sus alegatos textualmente en lo siguiente: “el fallo apelado no es preparatorio, como simplistamente se retuvo. Ese fallo es más que interlocutorio, porque tiende a hacerse definitivo, en razón de que la jurisdicción penal no está apoderada de las pretensiones civiles de los recurrentes; (...)”; “la corte *a qua* hizo una falsa aplicación del artículo 451 del Código de Procedimiento Civil, el cual versa sobre las sentencia preparatorias, y lo propio hizo con los artículos 44 y siguientes de la Ley 834 al declarar inadmisble de oficio el recurso de apelación, de los exponentes, sin ningún fundamento legal, como fácilmente se puede advertir por las pruebas que obran en el expediente; (...)”; que arguye además, que la corte *a qua* no podía declarar inadmisble el recurso de apelación bajo el motivo de considerarla preparatoria sino que debió acoger el recurso, revocar la sentencia apelada y en virtud de la facultad de avocación que le fue solicitada en el recurso, era facultativo de avocación acoger o rechazar la demanda, que al no actuar de esta forma vulneró los artículos 473 del Código de Procedimiento Civil (...);

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada se verifica, que la alzada para declarar la inadmisibilidad del recurso indicó: “que previo a cualquier consideración de derecho es procedente estatuir sobre la admisibilidad o no del recurso de apelación de que se trata”; “que de conformidad con las disposiciones del artículo 451 del Código de Procedimiento Civil, de los fallos preparatorios no podrá apelarse, son después de la sentencia definitiva y conjuntamente con la apelación de esta, que la sentencia impugnada se ha limitado, correctamente a sobreseer el conocimiento de la acción civil derivada de un hecho delictual hasta tanto el tribunal apoderado de la acción penal decida definitivamente sobre la responsabilidad de las partes involucradas en el accidente de tránsito (...); “que es de principio que lo juzgado en materia penal, se impone a lo civil, y que lo penal mantiene en estado lo civil, que al juzgar como lo hizo el juez *a quo* actuó apegado a la normativa procesal, y su sentencia, que se limita a sobreseer el asunto sometido a su consideración ha de ser reputada como una sentencia preparatoria (...);

Considerando, que ciertamente, tal y como lo indica la corte *a qua* en su decisión, la sentencia dictada por el juez de primer grado constituye una sentencia de carácter preparatorio, pues el juez solo se limitó a ordenar el sobreseimiento de la instancia; que este tipo de sentencias no resuelve ningún punto contencioso entre las partes ya que la misma no prejuzga ni resuelve el fondo del asunto y por tanto no podía interponerse contra ella recurso de apelación sino conjuntamente con la sentencia sobre el fondo; que al decidir la alzada en la forma en que lo hizo ha actuando conforme a derecho, sin incurrir en las violaciones denunciadas por los actuales recurrentes; que el criterio antes expuesto ha sido mantenido por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia en reiteradas ocasiones;

Considerando, que es preciso indicar, para mayor abundamiento que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia ha sentado el criterio siguiente: “que el tribunal civil apoderado de una demanda en reparación de daños y perjuicios fundada en la responsabilidad del guardián por el hecho de la cosa inanimada establecida en el artículo 1384, párrafo I, del Código Civil debe sobreseer el asunto hasta que la jurisdicción penal dicte un fallo definitivo e irrevocable si la acción en responsabilidad civil y la acción penal tienen su fuente en el mismo hecho”; en virtud del citado artículo 50 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15, la jurisdicción civil tiene la potestad de ordenar incluso de oficio el sobreseimiento de la acción civil hasta tanto se decida definitivamente la acción penal correspondiente debido a que la regla procesal “lo penal mantiene lo civil en estado”, tiene carácter de orden público puesto que su propósito es proteger la competencia respectiva de las jurisdicciones civil y penal, y así evitar la posibilidad de fallos contradictorios;

Considerando, que, finalmente, el fallo criticado contiene una exposición completa de los hechos del proceso, que le ha permitido a esta Suprema Corte de Justicia, en sus funciones de control casacional, verificar que la ley y el derecho han sido correctamente aplicados en el presente caso, por lo que y en adición a las demás razones expresadas anteriormente, procede rechazar el recurso de casación de que se trata.

Por tales motivos, **Primero:** Rechaza el recurso de casación interpuesto por los señores Francisco Marrero, Juana de la Cruz Lapaix, Guillermo Jiménez y Crucita García, contra la sentencia civil núm. 138-2011, dictada el 9 de septiembre de 2011, por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, cuyo dispositivo se transcribe en otro lugar de este fallo; **Segundo:** Condena a los señores Francisco Marrero, Juana de la Cruz Lapaix, Guillermo Jiménez y Crucita García, al pago de las costas procesales, distrayéndolas en beneficio del Lcdo. Edi González Céspedes, abogado de la parte recurrida, Seguros Cibao, S. A., y Miguel Darío de Jesús Brito Reynoso, quien afirma estarlas avanzado en su totalidad.

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia pública del 30 de agosto de 2017, años 174º de la Independencia y 155º de la Restauración.

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Manuel Alexis Read Ortiz y Blas Rafael Fernández Gómez. Cristiana A. Rosario, Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General,

que certifico.